

Cataluña no identifica a ninguna víctima de la Guerra Civil con la ley de fosas

- La Generalitat ha enterrado unos 30 cadáveres al no descubrir cómo se llamaban
- La falta de documentos de la época dificulta cumplir con el objetivo de la norma

JORDI RIBALAYGUE / Barcelona

Bajo una bandera o su contraria, miles de personas se marcharon al frente hace más de 70 años para no regresar nunca a casa. Hay quien ha aventurado el dato de 9.000 cadáveres, pero persiste la incógnita de cuántos fallecidos durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra siguen enterrados en fosas comunes en Cataluña. Tampoco resulta tarea fácil determinar dónde se les inhumó, aunque la Generalitat ha inventariado unas 370 sepulturas, parte de ellas pendientes de confirmar.

En julio de 2009, el Parlament refrendó la ley de fosas, una normativa sellada por el tripartito que elevaba a objetivo «localizar y, si procede, recuperar e identificar» a las víctimas de la contienda y la dictadura franquista. Sin embargo, la subdirección de Memòria i Pau reconoce que el Govern no ha sido capaz de poner nombre a los huesos que han visto la luz en los últimos tres años.

La intención de hallar a los desaparecidos y devolver los despojos a los familiares que los soliciten se ha demostrado un reto casi infranqueable. «Son sobre todo soldados muertos en el frente, la mayoría combatientes del ejército republicano, y por norma general las personas que en



Monumento dedicado a las víctimas del franquismo en el cementerio de Tarragona. / J. ANTONIO

por delante porque tiene organismos que otras comunidades no han creado o han suprimido», opina Solé.

En todo caso, la Historia y el paso de los años se han encargado de erigir obstáculos a la tarea que las instituciones se impusieron. Gran parte de las zanjas donde se depositaron los cuerpos se cavaron a toda prisa al mismo tiempo que la República perdía terreno, como ocurrió durante la batalla del Ebro y luego en la retirada hacia la frontera, a menudo apro-

vechando trincheras abandonadas o una oquedad abierta por el impacto de un proyectil. Solé enfatiza la dificultad que implica la ausencia de elementos que singularicen a los fallecidos así como la falta de documentos en los archivos, un rasgo propio de unas tropas en pleno repliegue.

«O tenemos la inmensa casualidad de que haya perdurado algo que los distinga, como una medallita, o es imposible, y en Cataluña no se ha dado un caso así», explica la historiadora,

que acota que fue frecuente exponer a los caídos. Aún más, a menudo sólo aparecen unos pocos huesos. Y aunque se analice un esqueleto completo, no se garantiza que se revele quién fue.

«Con un estudio antropológico, se puede saber cuánto medía, si era diestro o zurdo, si llevaba cantimplora, cubiertos o botas, detalles que dejan de piedra, pero nunca el nombre», advierte Solé. Tampoco se ha creado un banco de ADN, que exige-

ría una muestra de un descendiente por parte de madre para compararlo con el material genético de la víctima.

Entre todos los restos óseos descubiertos desde 2009, la Generalitat cifra los individuos desenterrados en unos 30, casi todos encontrados bajo el suelo de las violentas líneas de la Terra Alta y el Segrià. Las exhumaciones se aprobaron tras un hallazgo imprevisto o durante una excavación arqueológica. Sin embargo, ¿de quiénes se trataba? Se desconoce. Así, se los inhumó de nuevo en los cementerios de los municipios donde se los localizó o en el Memorial de Les Camposines, el recinto donde se da sepultura a los combatientes anónimos abatidos en el frente del Ebro.

Desde que se empezara a reivindicar la memoria histórica, el Ejecutivo catalán ha desentrañado el nombre a cinco cadáveres. Sin embargo, esos casos se solucionaron en 2004 y 2008, antes de instaurarse la ley.

Diferentes son las circunstancias en otras comunidades que también han impulsado la búsqueda de los asesinados. Es lo que sucede en Andalucía. La prolongada opresión de los rebeldes desde los primeros meses del conflicto en pueblos y municipios ha contribuido a que pervivieran testimonios de dónde se arrojó a los represaliados. A finales de 2010, la Junta confirmó que conocía la ubicación de la mitad de unos 47.000 desaparecidos. Sin embargo, la falta de financiación también ha congelado las investigaciones en Andalucía. «Allí, de forma mayoritaria se sabe dónde están las fosas y a quiénes se enterró, porque la gente ha preservado la memoria. En Cataluña, se sabe que murieron en la Guerra, pero nada más», observa Solé.

El consejo asesor se reunirá en septiembre tras no hacerlo desde 2010

Cataluña los buscan no saben dónde se encuentran», comenta la historiadora Queralt Solé, miembro del comité técnico que asesora a la Administración catalana.

A su vez, CiU ha rebajado el papel del Memorial Democràtic, un hito para el anterior Ejecutivo y, en especial, para ICV-EUiA. En dos años, la institución ha pasado de disponer de 3,7 millones de euros a la mitad, 1,8 millones. Las acciones para honrar a las víctimas del conflicto que estalló en 1936 se han reducido al mismo tiempo que la austeridad presupuestaria se imponía. Lo demuestra que el consejo de expertos que dictamina sobre la exhumación y la dignificación de fosas no se ha reunido desde que los nacionalistas mandan en la plaza de Sant Jaume.

No obstante, el Govern ha convocado una sesión para septiembre. «Se ha frenado un poco y, con la crisis, es más difícil intervenir en una cuestión que no es una prioridad para la sociedad, pero Cataluña sigue

Doce sepulturas señalizadas, 37 solicitudes por atender y 386 desaparecidos localizados

J. R. / Barcelona

Desde que era una niña, Montserrat Giné vio a su madre encender un candil una vez al año. Coincidió con la fecha en que el abuelo, Josep Giné, concejal de Esquerra Republicana en Els Guiamets, fue fusilado. El cuerpo se arrojó junto a los de otros 770 ajusticiados en un hoyo dentro del cementerio de Tarragona.

La sepultura, la segunda más grande tras la de Montjuïc, se señaló en 2010 y es una de las 12 que la Generalitat ha dignificado bajo el amparo de la ley. La hija y la nieta del edil sintieron liberarse cuando se inauguró el monumento después

de años de pelea.

«Nuestra primera intención era recuperar los restos, pero vimos que era muy difícil: se han hecho obras encima, se enterraron más cadáveres que no son de represaliados y no ha estado bien conservada, llegaron a poner una alambrada porque los perros escarbaban para sacar los huesos», ilustra Giné, que preside la asociación de víctimas de la represión franquista de Tarragona.

En ninguna de las solicitudes atendidas se ha optado por desenterrar. «Muy a menudo, las fosas están dentro del cementerio, son múltiples y se siguieron utilizando tras

la guerra; en el comité técnico, ha pesado el criterio de que la apertura es difícil en esas circunstancias», arguye Queralt Solé.

La historiadora es partidaria de exhumar las fosas que se excavaron para esconder los cadáveres de civiles y cuyos descendientes saben con mucha certeza dónde están. Es el caso de las tumbas del Pallars u otras que no se ha llegado a dar con ellas, como en Roda de Ter y los alrededores de El Bruc. «Ésas son una vergüenza y en ellas se debería actuar antes, pero no de forma paternalista ni impositiva, sólo si los familiares lo reclaman, y en el Pa-

llars no ha pasado», cuenta.

Sobre la mesa, esperan al menos 37 demandas para abrir o dignificar sepulturas, que no han sido estudiadas desde 2010. Pese a que el actual Govern ha relegado la memoria histórica a un segundo plano, en el censo en que se registran los desaparecidos en la contienda figuraban 4.435 inscritos el mayo pasado, unos 1.300 más que hace tres años. Casi 1.900 familias han recibido información sobre el antepasado que no volvieron a ver. Sólo en 386 casos se han hallado documentos que certifican dónde se enterró a las víctimas.